

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

R / 811

C.E.

Nº 321390

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Montevideo, 29 ENE. 2024

Señora Presidente de la Asamblea General,

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 numeral 7 y 168 numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se aprueba el "Convenio sobre Protección Internacional de los Adultos", hecho el 13 de enero de 2000, en La Haya, Reino de los Países Bajos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho internacional privado tiene por función determinar la ley aplicable a las relaciones privadas internacionales, señalar cuál es el juez internacionalmente competente para resolver sobre las mismas, e indicar qué validez extraterritorial se le dará a las sentencias o resoluciones dictadas en el extranjero.

Dentro del Derecho de Familia, en el ámbito internacional se cuenta con un elenco importante de instrumentos tendientes a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes (restitución internacional de menores, obligaciones alimenticias, etc.), y en

2023-6-1-0002827

11818

tiempos más recientes, tomando en consideración la extensión de la expectativa de vida a nivel mundial y el incremento notorio de las migraciones internacionales, desde la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado se puso foco también en la situación de las personas mayores de edad vulnerables. Es así que surge el Convenio cuya aprobación se somete a análisis, el cual establece entre sus consideraciones en el preámbulo, que "...conviene asegurar la protección en situaciones internacionales de los adultos que, debido a una alteración o insuficiencia de sus facultades personales, no están en condiciones de velar por sus intereses".

En palabras del Prof. Esc. Ruben SANTOS BELANDRO: "...la sola extensión de la vida humana -palpable por todos- no agota el análisis de la cuestión de la ancianidad. La vida de los ancianos se internacionaliza a partir del momento en el que grandes contingentes de personas mayores de edad se desplazan a países de clima más agradable para vivir allí la última etapa de sus vidas o, para disfrutar en esos lugares la mayor parte del año. Este fenómeno -que puede considerarse propio de los países altamente desarrollados- se ve acompañado por otro específico de los países en vías de desarrollo, los cuales experimentan la emigración de gran parte de su población hacia los países industrializados como forma de obtener un nivel de vida que se les niega en sus lugares de origen pero, como todos los que son inmigrantes, con el ánimo de regresar una vez cumplida la edad laboral. Súmese a ello el abatimiento progresivo de los costos de los pasajes internacionales, la rapidez y la mayor frecuencia de los viajes, y una mejor atención en las terminales. Todos estos componentes son los que provocan la aparición cada vez más asidua de casos internacionales relacionados con la protección de las personas adultas" (Cf. SANTOS BELANDRO, Ruben: Minoridad y Ancianidad en el mundo actual, AEU, 2ª edición, 2012, pág. 488). Y a mayor abundamiento: "Mucho ha cambiado sobre la protección internacional de los mayores de edad desde la elaboración de aquellas reglas contenidas en la mayoría de los Códigos Civiles de fines del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Ha mudado el componente demográfico de este sector e,

**MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES**

igualmente, el enfoque de los problemas que surgen habitualmente en su derredor. (...) Por estas razones cabe felicitar la aprobación de esta nueva Convención en cuanto permitirá medir la amplitud de las transformaciones que reclama la nueva realidad social, política y jurídica” (Cf. SANTOS BELANDRO, Ruben: Op. Cit., pág. 488).

Conforme a su artículo 1.2, el Convenio tiene por objeto: “a) determinar el Estado cuyas autoridades son competentes para tomar medidas de protección de la persona o de los bienes del adulto; b) determinar la ley aplicable por estas autoridades en el ejercicio de su competencia; c) determinar la ley aplicable a la representación del adulto; d) asegurar el reconocimiento y la ejecución de las medidas de protección en todos los Estados contratantes; e) establecer entre las autoridades de los Estados contratantes la cooperación necesaria para conseguir los objetivos del Convenio”. Como puede apreciarse, el instrumento busca cubrir, para la temática materia del mismo, los tres objetivos señalados en el párrafo 2, lo cual es ambicioso y destacable, al tener como resultado una cobertura total de la situación, que permite brindar certeza y previsibilidad en la continuidad internacional de las relaciones jurídicas tanto a los operadores jurídicos como a las personas finalmente interesadas.

En los términos del derecho interno uruguayo, y a la luz del contenido material de las disposiciones del Convenio conforme a su artículo 3, las situaciones comprendidas incluirán, entre otras, la determinación de la incapacidad y el establecimiento de un régimen de protección, la curatela, la colocación del adulto en un centro que pueda prestarle protección, y la administración, conservación o disposición de los bienes del adulto. En todo caso, se entenderá por adulto a una persona que haya alcanzado los 18 años de edad, conforme al artículo 2.1 del texto de marras.

El Convenio plantea soluciones modernas y flexibles, que parten de considerar a la residencia habitual como el punto de conexión inicial para fijar la competencia internacional de las autoridades respectivas, quienes aplicarían en principio sus propias

leyes, pero sin dejar de considerar otras leyes potencialmente aplicables o a ser tenidas en cuenta, como las de la nacionalidad, la de la anterior residencia habitual o donde el adulto tenga bienes, entre otras. En lo que refiere al reconocimiento de las medidas adoptadas por las autoridades de un Estado contratante, se parte del principio del reconocimiento de pleno derecho.

Cabe señalar especialmente que las previsiones del Convenio objeto de análisis son análogas a un texto anterior del que Uruguay ya es Estado Parte, emanado del mismo foro aunque con el foco en otro grupo etario de sujetos de Derecho, como es el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños (aprobado por Ley N° 18.535 del 21 de agosto de 2009). En tal sentido, como indica el Prof. Paul LAGARDE en el Informe Explicativo de este texto: “El Convenio sigue la estructura general del Convenio de 19 de octubre de 1996 y aplica en muchos aspectos las mismas soluciones. Ello no tiene nada de sorprendente, habida cuenta de que los dos Convenios fueron negociados básicamente por los mismos expertos gubernamentales que fueron llamados a examinar (...) si las soluciones aplicadas en el Convenio de 1996 podrían extenderse a la protección de los adultos” (Cf. LAGARDE, Paul – Convenio sobre Protección de Adultos – Informe Explicativo, 2017, par. 4, pág. 42). Por tanto, la incorporación de este texto a nuestro ordenamiento jurídico sería un complemento lógico, coherente y natural a las soluciones ya adoptadas respecto a situaciones similares en personas menores de edad.

Por lo demás, como es de conocimiento, la actual Legislatura dio un paso trascendental en la modernización de la normativa de derecho internacional privado de fuente nacional, al aprobar la Ley General en dicha materia, N° 19.920 del 27 de noviembre de 2020. La consideración y aprobación del texto convencional que se presenta en esta oportunidad profundizaría los avances en esta área de gran sensibilidad

**MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES**

e importancia creciente, al tratarse del instrumento jurídico más recientemente aprobado por la Conferencia de La Haya sobre el particular, moderno y completo, y se insertarían en la mejor tradición jurídica internacionalista del país, siendo por lo demás plenamente consistente con el espíritu de sus disposiciones relativas a la protección de personas incapaces mayores de edad, en los términos de los artículos 16 inciso 2, 20, 21, 57/C y 59/A de la Ley General, ampliando previsiones y supuestos desde una perspectiva convencional.

Al momento de elaborarse este Mensaje, los países entre los cuales se encuentra vigente el Convenio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Letonia, Mónaco, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suiza, por lo que de adherir nuestro país, sería el primero en hacerlo fuera de Europa, constituyendo ello una importante señal estratégica en el marco de la apertura multilateral extraregional del Uruguay, especialmente dada las características de la temática del texto en análisis y su vocación de cobertura universal.

Desde el punto de vista académico, además de la doctrina uruguaya que ha analizado el tema y expresamente se ha manifestado a favor de la adopción de este texto (Cf. Ruben SANTOS BELANDRO, Op. Cit., pág. 508), este Convenio se encuentra entre aquellos cuya adhesión entiende el Instituto Uruguayo de Derecho Internacional Privado que podría recomendarse (Cf. FRESNEDO, Cecilia; LORENZO, Gonzalo y DE LLANO, Ana: "Informe preliminar sobre la posibilidad de adhesión de Uruguay a ciertos convenios aprobados por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado" – En: Revista Uruguaya de Derecho Internacional Privado, número 10 -2018-, págs. 267-272).

Por último, corresponde informar que para los supuestos previstos en los artículos 28, 32.2 y 42 del Convenio, la Autoridad Central encargada de dar cumplimiento a las obligaciones que el convenio impone, será la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y

Legales del Ministerio de Educación y Cultura, lo cual será comunicado al depositario del Convenio conjuntamente con el depósito del instrumento de adhesión.

TEXTO

El Convenio consta de un Preámbulo, 59 artículos y un Anexo que contiene la "Recomendación adoptada por la comisión Especial de carácter diplomático sobre protección de los adultos", la cual consta de tres modelos de formularios: "Certificado", "Medidas de Protección relativas a un Adulto" e "Información sobre las Medidas de Protección relativas a un Adulto".

En relación al contenido del texto del Convenio, se transcribe a continuación fragmento del "Informe Explicativo del Convenio de 13 de enero de 2000 sobre Protección Internacional de los Adultos" de Paul Lagarde, publicado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado Oficina Permanente, La Haya, Países Bajos, en <https://www.hcch.net/es/publications-and-studies/details4/?pid=2951&dtid=3>.

"A semejanza del Convenio de 1996, el Convenio comprende los siete capítulos siguientes: Ámbito de aplicación del Convenio; Competencia; Ley aplicable; Reconocimiento y ejecución; Cooperación; Disposiciones generales; Cláusulas finales.

El capítulo I (arts. 1 a 4) define el objeto del Convenio y las personas a las que es de aplicación, ofrece una enumeración de carácter ilustrativo pero bastante completa de las medidas de protección que entran en el ámbito de aplicación del Convenio e indica, de manera limitativa, las materias excluidas del mismo.

El capítulo II relativo a la competencia (arts. 5 a 12) se aleja un poco del modelo de 1996. Este último se caracterizaba por su voluntad de evitar en principio la disputa de las autoridades de distintos Estados en torno a la competencia para la adopción de las

**MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES**

medidas de protección de la persona o los bienes del menor, y de hacer converger la competencia a favor de las autoridades del Estado de residencia habitual del menor. Algunos delegados hubieran deseado extender este sistema a los adultos. Sin embargo, esta preocupación era menos acuciante en este ámbito. Si bien es cierto que es sin duda deseable que la protección del adulto pueda ser asumida por las autoridades del Estado en el que tenga su residencia habitual, no hay que dejar de considerar que el adulto, a diferencia del menor cuya custodia se disputan sus progenitores, no es, en la mayoría de los casos, objeto de la pugna entre personas que pretenden ostentar su guarda. Así pues, sería conveniente no contrariar en demasía la buena voluntad de cualquier persona que estuviera dispuesta a asumir dicha carga. Si esta persona no reside en el mismo Estado que el adulto de cuya protección se trate, parece oportuno permitirle acudir a las autoridades más cercanas a su domicilio y no obligarla a actuar en el Estado, a lo mejor lejano, en el que el adulto tenga su residencia habitual. También se alegó que una competencia exclusiva de las autoridades del Estado de residencia habitual del adulto podría suponer una amenaza para su libertad individual, sobre todo en el supuesto de no haber elegido él mismo dicha residencia habitual. Esta consideración favorece la admisión de una competencia concurrente, al menos la de las autoridades del Estado de la nacionalidad del adulto.

El capítulo II refleja el compromiso alcanzado en la Comisión Especial. Así como el artículo 5 mantiene la competencia principal de las autoridades del Estado de residencia habitual del adulto, el artículo 7 atribuye una competencia concurrente, aunque subordinada, a las autoridades del Estado de nacionalidad del adulto. Y el artículo 8 permite a las autoridades del Estado de residencia habitual del adulto solicitar a las autoridades de otros Estados la adopción de medidas de protección en consideración al interés del adulto. El artículo 9 atribuye una competencia concurrente subsidiaria a favor de las autoridades del Estado en el que se encuentren los bienes del adulto. Los artículos 10 y 11 retoman los artículos 11 y 12 del Convenio sobre Protección de Menores en

relación con los casos de urgencia y determinadas medidas de carácter temporal con efecto territorial limitado.

El capítulo III relativo a la ley aplicable (arts. 13 a 21) recoge el principio del Convenio de 1996 según el cual las autoridades de los Estados que adopten una medida de protección aplicarán su propia ley (art. 13). Determina igualmente la ley aplicable a los poderes de representación conferidos por un adulto que deban ejercitarse cuando dicho adulto no esté en condiciones de proteger sus intereses (art. 15).

El capítulo IV (arts. 22 a 27) sigue de cerca el modelo del Convenio de 1996 y regula detalladamente el reconocimiento y la ejecución, en un Estado contratante, de las medidas de protección adoptadas en otro Estado contratante. Distingue claramente el reconocimiento, el exequátur o la inscripción a efectos de ejecución y la ejecución.

El capítulo V (arts. 28 a 37) instituye un mecanismo de cooperación entre Estados contratantes, siguiendo también muy de cerca el capítulo correspondiente del Convenio de 1996. Este mecanismo descansa, como en el caso de muchos otros Convenios de La Haya, en la creación, en cada Estado contratante, de una Autoridad Central (art. 28), cuyas obligaciones y facultades se definen en los artículos siguientes.

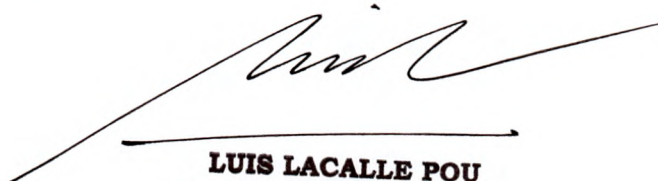
El capítulo VI (arts. 38 a 52) contiene las disposiciones generales destinadas a facilitar la implementación y el seguimiento del Convenio, así como a proteger la confidencialidad de los datos e informaciones recogidos de conformidad con el mismo. Determina igualmente el momento a partir del cual puede ser aplicado (art. 50), pretende prevenir los conflictos entre convenios (arts. 48 y 49) y transpone los artículos 46 a 49 del Convenio sobre Protección de Menores en lo que respecta a su aplicación con respecto a los Estados en los que se aplique más de un ordenamiento jurídico (las llamadas cláusulas federales, arts. 44 a 47).

**MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES**

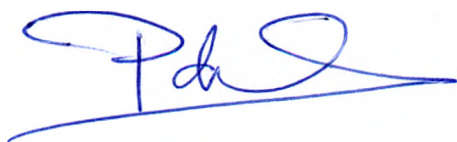
El capítulo VII (arts. 53 a 59) contiene las cláusulas protocolarias habituales relativas a la firma, entrada en vigor, adhesiones y denuncia.

En atención a lo expuesto y destacando la conveniencia para la República de suscribir Convenios sobre esta materia, el Poder Ejecutivo solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera a la señora Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.



LUIS LACALLE POU
Presidente de la República



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

C.E. N° 321394

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Montevideo, 29 ENE. 2024

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el "Convenio sobre Protección Internacional de los Adultos", hecho el 13 de enero de 2000, en La Haya, Reino de los Países Bajos.

of-
PhQ

35. Convenio¹ sobre Protección Internacional de los Adultos²

*(hecho el 13 de enero de 2000)*³

Los Estados signatarios del presente Convenio,

Considerando que conviene asegurar la protección en situaciones internacionales de los adultos que, debido a una alteración o insuficiencia de sus facultades personales, no están en condiciones de velar por sus intereses,

Deseando evitar conflictos entre sus sistemas jurídicos en materia de competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de medidas para la protección de los adultos,

Recordando la importancia de la cooperación internacional para la protección de los adultos,

Afirmando que el interés del adulto y el respeto a su dignidad y a su voluntad deben ser consideraciones primordiales,

Han acordado las siguientes disposiciones:

CAPITULO I - ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO

Artículo 1

1. El presente Convenio se aplicará, en situaciones internacionales, a la protección de los adultos que, por una disminución o insuficiencia de sus facultades personales, no están en condiciones de velar por sus intereses.

2. Tiene por objeto:

- a) determinar el Estado cuyas autoridades son competentes para tomar medidas de protección de la persona o de los bienes del adulto;

¹ Se usa el término "Convenio" como equivalente de "Convención".

² Este Convenio, así como la documentación correspondiente, se encuentra disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (www.hcch.net), bajo el rubro "Convenios". Para obtener el historial completo del Convenio, véase Hague Conference on Private International Law, *Proceedings of the Special Commission of a diplomatic character (1999)*, Tome II, *Protection of adults* (ISBN 90-808014-1-0, 461 pp.).

³ Entrado en vigor el 1º de enero de 2009. Sobre el estado del Convenio, <http://www.hcch.net>.

- b) determinar la ley aplicable por estas autoridades en el ejercicio de su competencia;
- c) determinar la ley aplicable a la representación del adulto;
- d) asegurar el reconocimiento y la ejecución de las medidas de protección en todos los Estados contratantes;
- e) establecer entre las autoridades de los Estados contratantes la cooperación necesaria para conseguir los objetivos del Convenio.

Artículo 2

1. A efectos del presente Convenio, un adulto es una persona que haya alcanzado la edad de 18 años.
2. El Convenio se aplicará también a las medidas relativas a un adulto que no hubiera alcanzado la edad de 18 años cuando se adoptaron dichas medidas.

Artículo 3

Las medidas previstas el artículo 1 pueden referirse, en particular, a:

- a) la determinación de la incapacidad y el establecimiento de un régimen de protección;
- b) la colocación del adulto bajo la protección de una autoridad judicial o administrativa;
- c) la tutela, la curatela y otras instituciones análogas;
- d) la designación y funciones de toda persona u organismo encargado de ocuparse de la persona o de los bienes del adulto, de representarlo o de asistirlo;
- e) la colocación del adulto en un centro u otro lugar en el que pueda prestársele protección;
- f) la administración, conservación o disposición de los bienes del adulto;
- g) la autorización de una intervención puntual para la protección de la persona o de los bienes del adulto.

Artículo 4

1. Están excluidos del ámbito de aplicación del Convenio:
 - a) las obligaciones alimentarias;
 - b) la celebración, nulidad y disolución del matrimonio o cualquier relación similar, así como la separación legal;

- c) los regímenes matrimoniales y los regímenes de la misma naturaleza aplicables a relaciones análogas al matrimonio;
- d) los *trusts*⁴ y las sucesiones;
- e) la seguridad social;
- f) las medidas públicas de carácter general en materia de salud;
- g) las medidas adoptadas respecto de una persona como consecuencia de infracciones penales cometidas por esa persona;
- h) las decisiones sobre el derecho de asilo o en materia de inmigración;
- i) las medidas que tengan como único objeto la salvaguardia de la seguridad pública.

2. El apartado 1 no afectará, respecto de las materias a que se hace referencia en el mismo, a la condición de una persona a actuar como representante del adulto.

CAPITULO II - COMPETENCIA

Artículo 5

1. Las autoridades, tanto judiciales como administrativas, del Estado contratante de residencia habitual del adulto serán competentes para adoptar las medidas de protección de la persona o los bienes del adulto.
2. En caso de traslado de la residencia habitual del adulto a otro Estado contratante, serán competentes las autoridades del Estado de la nueva residencia habitual.

Artículo 6

1. Respecto a los adultos que sean refugiados y los que, como consecuencia de desórdenes ocurridos en su país, están internacionalmente desplazados, son competentes según el apartado 1 del artículo 5 las autoridades del Estado contratante en cuyo territorio se encuentren estos adultos como consecuencia de su desplazamiento.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también aplicable a los adultos cuya residencia habitual no pueda determinarse.

Artículo 7

1. Salvo por lo que respecta a los adultos que sean refugiados o que, como consecuencia de desórdenes ocurridos en el Estado de su nacionalidad, están internacionalmente desplazados, las autoridades de un Estado contratante del que sea nacional el adulto serán competentes para adoptar medidas para la protección de su persona o sus bienes si consideran que están en mejores condiciones para valorar el interés del adulto, y después de comunicarlo a las

⁴ En algunos países de Hispanoamérica, conocida esta figura como "fideicomiso".

autoridades competentes en virtud del artículo 5 o del apartado 2 del artículo 6.

2. Esta competencia no podrá ejercerse si las autoridades competentes en virtud del artículo 5, del apartado 2 del artículo 6 o del artículo 8 hubieran informado a las autoridades del Estado del que sea nacional el adulto de que han adoptado las medidas que requiere la situación o han decidido que no deben tomarse medidas o de que se encuentra pendiente un procedimiento ante las mismas.

3. Las medidas adoptadas en virtud del apartado 1 dejarán de producir efecto tan pronto como las autoridades competentes en virtud del artículo 5, del apartado 2 del artículo 6 o del artículo 8 hayan tomado las medidas que requiere la situación o hayan decidido que no deben tomarse medidas. Estas autoridades informarán a las autoridades que hayan tomado medidas de conformidad con el apartado 1.

Artículo 8

1. Las autoridades de un Estado contratante que sean competentes en virtud del artículo 5 o del artículo 6, cuando consideren que ello redundaría en interés del adulto, podrán, por propia iniciativa o a petición de la autoridad de otro Estado contratante, requerir a las autoridades de uno de los Estados mencionados en el apartado 2 que tomen medidas para la protección de la persona o los bienes del adulto. La solicitud podrá referirse a todos o algunos de los aspectos de dicha protección.

2. Los Estados contratantes a cuyas autoridades podrá acudir según lo previsto en el apartado anterior serán:

- a) un Estado del que el adulto posea la nacionalidad;
- b) el Estado de la anterior residencia habitual del adulto;
- c) un Estado en el que se encuentren situados bienes del adulto;
- d) el Estado cuyas autoridades el adulto haya escogido por escrito para que adopte medidas relativas a su protección;
- e) el Estado de la residencia habitual de una persona allegada al adulto dispuesta a hacerse cargo de su protección;
- f) el Estado en cuyo territorio se encuentre el adulto, por lo que respecta a la protección de su persona.

3. En el caso de que la autoridad designada conforme a los apartados anteriores no acepte su competencia, seguirán siendo competentes las autoridades del Estado contratante que lo fueren en virtud de los artículos 5 ó 6.

Artículo 9

Las autoridades de un Estado contratante en el que se encuentren situados bienes del adulto serán competentes para tomar medidas de protección relativas a esos bienes, en la medida en que dichas medidas sean compatibles con las adoptadas por las autoridades competentes según los artículos 5 a 8.

Artículo 10

1. En todos los casos de urgencia, las autoridades de cualquier Estado contratante en cuyo territorio se encuentre el adulto o bienes que le pertenezcan serán competentes para tomar cualesquiera medidas necesarias de protección.
2. Las medidas adoptadas en virtud del apartado anterior respecto de un adulto que tenga su residencia habitual en un Estado contratante dejarán de producir efecto tan pronto como las autoridades que sean competentes según los artículos 5 a 9 hayan tomado las medidas exigidas por la situación.
3. Las medidas adoptadas en virtud del apartado 1 con respecto a un adulto que tenga su residencia habitual en un Estado no contratante dejarán de producir efecto en cada Estado contratante tan pronto como sean reconocidas las medidas exigidas por la situación y adoptadas por las autoridades de otro Estado.
4. Las autoridades que hayan adoptado medidas conforme al apartado 1, informarán, siempre que sea posible, de las medidas adoptadas a las autoridades del Estado contratante de la residencia habitual del adulto.

Artículo 11

1. Excepcionalmente, las autoridades de un Estado contratante en cuyo territorio se encuentre el adulto serán competentes para adoptar medidas para la protección de la persona del adulto de carácter temporal y con eficacia territorial limitada al Estado de que se trate, en tanto en cuanto dichas medidas sean compatibles con las que ya hayan adoptado las autoridades que sean competentes según los artículos 5 a 8, y una vez informadas las autoridades competentes según el artículo 5.
2. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado anterior con respecto a un adulto que tenga su residencia habitual en un Estado contratante, dejarán de producir efecto tan pronto como las autoridades competentes conforme a los artículos 5 a 8 se hayan pronunciado respecto de las medidas de protección que pueda requerir la situación.

Artículo 12

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 7, las medidas adoptadas en aplicación de los artículos 5 a 9 permanecerán en vigor en sus propios términos, incluso si un cambio en las circunstancias hubiera hecho desaparecer el elemento sobre el que se basaba dicha competencia, hasta tanto que las autoridades que sean competentes en virtud del Convenio no hayan modificado, sustituido o revocado dichas medidas.

CAPITULO III - LEY APLICABLE

Artículo 13

1. En el ejercicio de la competencia atribuida por las disposiciones del Capítulo II, las autoridades de los Estados contratantes aplicarán su propia ley.

2. No obstante, en la medida en que lo requiera la protección de la persona o de los bienes del adulto, podrá aplicarse o tenerse en cuenta excepcionalmente la ley de otro Estado con el que la situación tenga un vínculo estrecho.

Artículo 14

Cuando una medida adoptada en un Estado contratante produzca efectos en otro Estado contratante las condiciones de su aplicación se regirán por la ley de este otro Estado.

Artículo 15

1. La existencia, alcance, modificación y extinción de los poderes de representación conferidos por un adulto, en virtud de un acuerdo o por un acto unilateral, para ejercitarse cuando dicho adulto no esté en condiciones de velar por sus intereses, se regirán por la ley del Estado de la residencia habitual del adulto en el momento del acuerdo o del acto unilateral, a no ser que haya designado expresamente por escrito alguna de las leyes mencionadas en el apartado 2.

2. Los Estados cuyas leyes podrán designarse son:

- a) un Estado del que el adulto posea la nacionalidad;
- b) el Estado de la anterior residencia habitual del adulto;
- c) un Estado en el que se encuentren situados bienes del adulto, con respecto a dichos bienes.

3. Las modalidades de ejercicio de dichos poderes de representación se regirán por la ley del Estado en el que se ejerciten.

Artículo 16

Cuando los poderes de representación a que se refiere el artículo 15 no se ejerciten de manera suficiente para garantizar la protección de la persona o de los bienes del adulto, podrán ser revocados o modificados mediante medidas adoptadas por una autoridad competente en virtud del Convenio. Cuando se revoquen o modifiquen dichos poderes de representación, deberá tenerse en cuenta en la medida de lo posible la ley a que se refiere el artículo 15.

Artículo 17

1. No podrá impugnarse la validez de un acto celebrado entre un tercero y otra persona que tendría la condición de representante del adulto según la ley del Estado en que se haya celebrado el acto, ni el tercero incurrirá en responsabilidad únicamente por el motivo de que la otra persona no tuviera la condición de representante del adulto según la ley designada por las disposiciones del presente Capítulo, a menos que el tercero supiera o hubiera debido saber que la condición de representante se regía por esta última ley.

2. El apartado anterior será aplicable únicamente si el acto se hubiera celebrado entre personas que se encuentren en el territorio del mismo Estado.

Artículo 18

Las disposiciones del presente Capítulo serán aplicables incluso si la ley designada por ellas fuera la de un Estado no contratante.

Artículo 19

A los efectos de este Capítulo, se entenderá por "ley" el Derecho vigente en un Estado, con exclusión de sus normas de conflicto de leyes.

Artículo 20

El presente Capítulo no impedirá la aplicación de las disposiciones de la ley del Estado en que deba protegerse al adulto cuando la aplicación de dichas disposiciones sea obligatoria independientemente de la ley que sería aplicable en otro caso.

Artículo 21

La aplicación de la ley designada por las disposiciones del presente Capítulo sólo puede excluirse si es manifiestamente contraria al orden público.

CAPITULO IV - RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN

Artículo 22

1. Las medidas adoptadas por las autoridades de un Estado contratante serán reconocidas de pleno derecho en los demás Estados contratantes.
2. No obstante, el reconocimiento podrá denegarse:
 - a) si la medida hubiera sido adoptada por una autoridad cuya competencia no se basara o no estuviera de conformidad con alguno de los criterios de competencia previstos en el Capítulo II;
 - b) si la medida hubiera sido adoptada, salvo en caso de urgencia, en el marco de un procedimiento judicial o administrativo, en el que no se hubiera dado al adulto la posibilidad de ser oído, contraviniendo los principios fundamentales de procedimiento del Estado requerido;
 - c) si el reconocimiento fuera manifiestamente contrario al orden público del Estado requerido, o fuera contrario a una disposición de la ley de dicho Estado que tenga carácter imperativo independientemente de la ley que sería aplicable en otro caso;
 - d) si la medida fuera incompatible con una medida posterior adoptada en un Estado no contratante que sería competente según los artículos 5 a 9, cuando esta última medida reúna los requisitos para su reconocimiento en el Estado requerido;
 - e) si no se ha respetado el procedimiento previsto en el artículo 33.

Artículo 23

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 22, cualquier persona interesada podrá solicitar de las autoridades competentes de un Estado contratante que decidan sobre el reconocimiento o no reconocimiento de una medida adoptada en otro Estado contratante. El procedimiento se regirá por la ley del Estado requerido.

Artículo 24

La autoridad del Estado requerido estará vinculada por las constataciones de hecho en que la autoridad del Estado que haya adoptado la medida hubiera basado su competencia.

Artículo 25

1. Si las medidas adoptadas en un Estado contratante y sean ejecutorias en el mismo, requieren ejecución en otro Estado contratante, serán declaradas ejecutorias o registradas a efectos de ejecución en ese otro Estado, a petición de toda parte interesada, según el procedimiento previsto por la ley de ese último Estado.
2. Cada Estado contratante aplicará un procedimiento simple y rápido a la declaración de ejecutoriedad o al registro.
3. La declaración de ejecutoriedad o el registro podrán denegarse únicamente por uno de los motivos previstos en el apartado 2 del artículo 22.

Artículo 26

Sin perjuicio de la revisión que sea necesaria en aplicación de los artículos precedentes, la autoridad del Estado requerido no procederá a revisión alguna en cuanto al fondo de la medida adoptada.

Artículo 27

Las medidas adoptadas en un Estado contratante y declaradas ejecutorias o registradas a efectos de su ejecución en otro Estado contratante serán ejecutadas en este último Estado como si hubieran sido tomadas por las autoridades de este otro Estado. La ejecución se realizará de conformidad con la ley del Estado requerido en la medida prevista por dicha ley.

CAPITULO V - COOPERACIÓN

Artículo 28

1. Todo Estado contratante designará una Autoridad Central encargada de dar cumplimiento a las obligaciones que el Convenio le impone.
2. Un Estado federal, un Estado en el que están en vigor varios sistemas jurídicos o un Estado con unidades territoriales autónomas puede designar más de una Autoridad Central y especificar la extensión territorial o personal de sus atribuciones. El Estado que haga uso de esta facultad, designará la Autoridad Central a la que puede dirigirse toda comunicación para su transmisión a la Autoridad Central competente dentro de ese Estado.

Artículo 29

1. Las Autoridades Centrales deberán cooperar entre ellas y promover la colaboración entre las Autoridades competentes de sus respectivos Estados para alcanzar los objetivos del Convenio.
2. Dichas Autoridades adoptarán, en el marco de la aplicación del Convenio, las disposiciones apropiadas para proporcionar informaciones sobre su legislación, así como sobre los servicios disponibles en sus respectivos Estados en materia de protección del adulto.

Artículo 30

La Autoridad Central de un Estado contratante tomará, ya sea directamente o con la cooperación de autoridades públicas o de otros organismos, todas las medidas apropiadas para:

- a) facilitar las comunicaciones, por cualquier medio, entre las autoridades competentes en las situaciones a las que se aplica el Convenio;
- b) ayudar, a petición de una autoridad competente de otro Estado contratante, a localizar al adulto cuando parezca que éste se encuentra en el territorio del Estado requerido y necesita protección.

Artículo 31

Las autoridades competentes de un Estado contratante podrán fomentar, directamente o a través de otros organismos, el uso de la mediación, de la conciliación o de otros medios similares para conseguir acuerdos amistosos la protección de la persona o de los bienes del adulto en las situaciones a las que se aplica el Convenio.

Artículo 32

1. Cuando se prevea una medida de protección, las autoridades competentes según el Convenio, si así lo requiere la situación del adulto, podrán solicitar de cualquier autoridad de otro Estado contratante que posea información útil para la protección del adulto que les comunique dicha información.
2. Todo Estado contratante podrá declarar que las peticiones previstas en el apartado 1 se transmitirán únicamente por el conducto de su autoridad central.
3. Las autoridades competentes de un Estado contratante podrán solicitar de las autoridades de otro Estado contratante su asistencia en la aplicación de medidas de protección adoptadas en aplicación del presente Convenio.

Artículo 33

1. Cuando la autoridad competente según los artículos 5 a 8 prevea la colocación del adulto en un centro u otro lugar en el que pueda prestársele protección y si dicha colocación va a tener lugar en otro Estado contratante, consultará previamente a la Autoridad Central u otra autoridad competente de este último Estado. A tal efecto le transmitirá un informe sobre el adulto junto con las razones para la colocación propuesta.

2. La decisión sobre la colocación no podrá tomarse en el Estado requirente si la Autoridad Central u otra autoridad competente del Estado requerido manifiesta su oposición dentro de un plazo razonable.

Artículo 34

En el caso de que el adulto esté expuesto a un peligro grave, las autoridades competentes del Estado contratante en que se hayan tomado medidas de protección del adulto o estén en vías de serlo, si se les informa de que el adulto ha cambiado la residencia a otro Estado o de que se encuentra en otro Estado, informarán a las autoridades de ese otro Estado acerca del peligro y de las medidas adoptadas o en vías de adopción.

Artículo 35

Una autoridad no pedirá ni transmitirá ninguna información en virtud del presente Capítulo si el hacerlo supusiera, a su juicio, un peligro para la persona o los bienes del adulto, o constituyera una amenaza grave para la libertad o la vida de un miembro de la familia del adulto.

Artículo 36

1. Sin perjuicio de la posibilidad de reclamar unos gastos razonables por los servicios prestados, las Autoridades Centrales y las demás autoridades públicas de los Estados contratantes soportarán sus propios gastos derivados de la aplicación de las disposiciones del presente Capítulo.

2. Todo Estado contratante podrá concluir acuerdos con otro o varios Estados contratantes sobre la distribución de gastos.

Artículo 37

Todo Estado contratante podrá celebrar acuerdos con otro o varios Estados contratantes para mejorar la aplicación del presente Capítulo en sus relaciones mutuas. Los Estados que hayan concluido tales acuerdos transmitirán copia del mismo al depositario del Convenio.

CAPITULO VI - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 38

1. Las autoridades del Estado contratante en el que se haya tomado una medida de protección o se haya confirmado un poder de representación podrán expedir a la persona a la que se le haya confiado la protección de la persona o de los bienes del adulto, a petición de la misma, un certificado en el que se indique la calidad en que dicha persona está habilitada para actuar y los poderes conferidos.

2. La condición y los poderes que consten en el certificado se presumirán conferidos a esa persona en la fecha del certificado, salvo prueba en contrario.

3. Cada Estado contratante designará a las autoridades competentes para expedir el

certificado.

Artículo 39

Los datos personales recogidos o transmitidos en virtud del Convenio se utilizarán únicamente para los fines para los que fueron recogidos o transmitidos.

Artículo 40

Las autoridades a las que se transmita la información garantizarán su confidencialidad, de conformidad con la ley de su Estado.

Artículo 41

Los documentos remitidos o expedidos en virtud del presente Convenio estarán exentos de legalización o cualquier otra formalidad análoga.

Artículo 42

Todo Estado contratante podrá designar las autoridades a las que deberán dirigirse las solicitudes a que se refieren los artículos 8 y 33.

Artículo 43

1. Las designaciones a que se refieren los artículos 28 y 42 serán comunicadas a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado no más tarde de la fecha de depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del Convenio o de la adhesión al mismo. Toda modificación en las mismas se comunicará también a la Oficina Permanente.

2. La declaración a que se refiere el apartado 2 del artículo 32 se hará al depositario del Convenio.

Artículo 44

Un Estado contratante en el que se aplican sistemas jurídicos o conjuntos de normas diferentes en materia de protección de la persona o de los bienes del adulto no está obligado a aplicar las normas del Convenio a los conflictos únicamente relacionados con estos diferentes sistemas o conjuntos de reglas.

Artículo 45

En relación a un Estado en el que dos o más sistemas jurídicos o conjuntos de reglas relativas a las cuestiones reguladas en el presente Convenio se aplican en unidades territoriales diferentes:

- a) cualquier referencia a la residencia habitual en este Estado se interpretará como una referencia a la residencia habitual en una unidad territorial;
- b) cualquier referencia a la presencia del adulto en este Estado se interpretará como una referencia a la presencia en una unidad territorial;

- c) cualquier referencia a la situación de bienes del adulto en este Estado se interpretará como una referencia a la situación de bienes del adulto en una unidad territorial;
- d) cualquier referencia al Estado del que el adulto posee la nacionalidad se interpretará como una referencia a la unidad territorial designada por la ley de este Estado o, en ausencia de reglas pertinentes, a la unidad territorial con la que el adulto presente el vínculo más estrecho;
- e) cualquier referencia al Estado cuyas autoridades hayan sido elegidas por el adulto se interpretará:
 - como una referencia a la unidad territorial si el adulto ha elegido las autoridades de esa unidad territorial;
 - como una referencia a la unidad territorial con la que el adulto tenga el vínculo más estrecho si el adulto ha elegido las autoridades de este Estado sin especificar una unidad territorial determinada dentro del Estado;
- f) cualquier referencia a la ley de un Estado con el que la situación tenga un vínculo estrecho se interpretará como una referencia a la ley de una unidad territorial con la que la situación presente un vínculo estrecho;
- g) cualquier referencia a la ley, el procedimiento o la autoridad del Estado en que la medida ha sido adoptada se interpretará como una referencia a la ley, el procedimiento en vigor en dicha unidad territorial o a la autoridad de la unidad territorial en que dicha medida ha sido adoptada;
- h) cualquier referencia a la ley, el procedimiento o la autoridad del Estado requerido se interpretará como una referencia a la ley, el procedimiento en vigor en dicha unidad territorial o a la autoridad de la unidad territorial en la que se invoca el reconocimiento o ejecución;
- i) cualquier referencia al Estado en que deba aplicarse una medida de protección se interpretará como una referencia a la unidad territorial en que deba aplicarse la medida;
- j) cualquier referencia a organismos o autoridades de ese Estado distintas de las Autoridades Centrales se interpretará como una referencia a los organismos o autoridades que estén autorizados para actuar en la unidad territorial de que se trate.

Artículo 46

Para determinar la ley aplicable en virtud del Capítulo III, en el caso de que un Estado comprenda dos o más unidades territoriales, cada una de las cuales posea su propio sistema jurídico o un conjunto de reglas relativas a las cuestiones reguladas por el presente Convenio, se aplican las reglas siguientes:

- a) en el caso de que en dicho Estado existan normas vigentes que identifiquen la

unidad territorial cuya ley deberá ser aplicada, se aplicará dicha ley;

- b) en defecto de tales normas, se aplicará la ley de la unidad territorial determinada según las disposiciones del artículo 47.

Artículo 47

Para determinar la ley aplicable en virtud del Capítulo III, cuando un Estado tenga, para las cuestiones reguladas por el presente Convenio, dos o más sistemas jurídicos o conjuntos de reglas aplicables a categorías diferentes de personas, se aplicarán las reglas siguientes:

- a) En el caso de que en dicho Estado existan normas vigentes que identifiquen cual de estas leyes es aplicable, se aplicará esta ley.
- b) A falta de tales normas, se aplicará la ley del sistema o del conjunto de reglas con el que el adulto presente el vínculo más estrecho.

Artículo 48

En las relaciones entre los Estados contratantes, el presente Convenio sustituirá al Convenio relativo a la Incapacitación y las Medidas de Protección Análogas firmado en La Haya el 17 de julio de 1905.

Artículo 49

1. El Convenio no derogará los instrumentos internacionales en que los Estados contratantes sean partes y que contengan disposiciones sobre materias reguladas por el presente Convenio, salvo declaración en contrario de los Estados vinculados por dichos instrumentos.
2. El Convenio no afectará a la posibilidad para uno o varios Estados contratantes de concluir acuerdos que contengan disposiciones sobre las materias reguladas por el presente Convenio, respecto a adultos que tengan su residencia habitual en uno de los Estados parte en tales acuerdos.
3. Los acuerdos concluidos por uno o varios Estados contratantes sobre materias reguladas por el presente Convenio no afectarán a la aplicación de las disposiciones del presente Convenio en las relaciones de estos Estados con los demás Estados contratantes.
4. Los apartados anteriores se aplicarán también a las leyes uniformes basadas en lazos especiales de naturaleza regional u de otra índole entre los Estados de que se trate.

Artículo 50

1. El Convenio se aplicará tan solo a las medidas adoptadas en un Estado después de la entrada en vigor del Convenio para dicho Estado.
2. El Convenio se aplicará al reconocimiento y a la ejecución de las medidas adoptadas después de su entrada en vigor en las relaciones entre el Estado en que se hayan adoptado las medidas y el Estado requerido.

3. El Convenio se aplicará desde su entrada en vigor en un Estado contratante a los poderes de representación conferidos con anterioridad en condiciones que se correspondan con las previstas en el artículo 15.

Artículo 51

1. Toda comunicación a la Autoridad Central o a cualquier otra autoridad de un Estado contratante se dirigirá en la lengua original y acompañada de una traducción a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales de este Estado o, cuando esta traducción sea difícilmente realizable, de una traducción al francés o al inglés.

2. No obstante, un Estado contratante podrá oponerse a la utilización del francés o del inglés, pero no de ambos, haciendo la reserva prevista en el artículo 56.

Artículo 52

El Secretario General de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado convocará periódicamente una Comisión Especial con el fin de examinar el funcionamiento práctico del Convenio.

CAPITULO VII - CLÁUSULAS FINALES

Artículo 53

1. El Convenio estará abierto a la firma de los Estados que fueran Miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado el 2 de octubre de 1999.

2. Será ratificado, aceptado o aprobado y los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, depositario del Convenio.

Artículo 54

1. Cualquier otro Estado podrá adherirse al Convenio después de su entrada en vigor en virtud del apartado 1 del artículo 57.

2. El instrumento de adhesión se depositará en poder del depositario.

3. La adhesión sólo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y los Estados contratantes que no hubiesen formulado objeción a la adhesión en los seis meses siguientes a la recepción de la notificación a que se refiere la letra b) del artículo 59. Podrá asimismo formular una objeción al respecto cualquier Estado en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del Convenio posterior a la adhesión. Dichas objeciones serán notificadas al depositario del Convenio.

Artículo 55

1. Cuando un Estado comprenda dos o más unidades territoriales en las que se apliquen sistemas jurídicos diferentes en lo que se refiere a cuestiones reguladas por el presente Convenio, podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o

adhesión, que el Convenio se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o varias de ellas y podrá en cualquier momento modificar esta declaración haciendo una nueva.

2. Toda declaración de esta naturaleza será notificada al depositario del Convenio y en ella se indicarán expresamente las unidades territoriales a las que el Convenio será aplicable.

3. En el caso de que un Estado no formule declaración alguna al amparo del presente artículo, el Convenio se aplicará a la totalidad del territorio de dicho Estado.

Artículo 56

1. Todo Estado contratante podrá, a más tardar en el momento de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión o en el momento de una declaración hecha en virtud del artículo 55, hacer la reserva prevista en el apartado 2 del artículo 51. Ninguna otra reserva será admitida.

2. Todo Estado podrá, en cualquier momento, retirar una reserva que hubiera hecho. El retiro se notificará al depositario.

3. La reserva dejará de surtir efecto el día primero del tercer mes posterior a la notificación a que se hace referencia en el apartado precedente.

Artículo 57

1. El Convenio entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la expiración de un periodo de tres meses después del depósito del tercer instrumento de ratificación, aceptación o aprobación previsto por el artículo 53.

2. En lo sucesivo, el Convenio entrará en vigor:

- a) para cada Estado que lo ratifique, acepte o apruebe posteriormente, el día primero del mes siguiente a la expiración de un periodo de tres meses después del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;
- b) para cada Estado que se adhiera, el día primero del mes siguiente a la expiración de un periodo de tres meses después de la expiración del plazo de seis meses previsto en el apartado 3 del artículo 54;
- c) para las unidades territoriales a la que se haya hecho extensivo el Convenio de conformidad con el artículo 55, el día primero del mes siguiente a la expiración de un periodo de tres meses después de la notificación prevista en dicho artículo.

Artículo 58

1. Todo Estado parte en el Convenio podrá denunciarlo mediante notificación por escrito dirigida al depositario. La denuncia podrá limitarse a determinadas unidades territoriales a las que se aplique el Convenio.

2. La denuncia surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de un periodo

de doce meses después de la fecha de recepción de la notificación por el depositario. En caso de que en la notificación se fije un periodo más largo para que la denuncia surta efecto, éste tendrá efecto cuando transcurra dicho periodo.

Artículo 59

El depositario notificará a los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y a los Estados que se hayan adherido de conformidad con el artículo 54, lo siguiente:

- a) las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que se refiere el artículo 53;
- b) las adhesiones y las objeciones a las adhesiones a que se refiere el artículo 54;
- c) la fecha en que el Convenio entrará en vigor de conformidad con el artículo 57;
- d) las declaraciones a que se refieren el apartado 2 del artículo 32 y el artículo 55;
- e) los acuerdos a que se refiere el artículo 37;
- f) la reserva a que se refiere el apartado 2 del artículo 51, y el retiro a que se refiere el apartado 2 del artículo 56;
- g) las denuncias a que se refiere el artículo 58.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados para ello, han firmado el presente Convenio.

Hecho en La Haya, el 13 de enero de 2000, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar que será depositado en los archivos del Gobierno del Reino de los Países Bajos, y del cual se remitirá por vía diplomática una copia auténtica a cada uno de los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado el 2 de octubre de 1999.

**Recomendación adoptada por la Comisión Especial
de carácter diplomático sobre protección de los adultos**

La Comisión Especial recomienda a los Estados parte en el Convenio sobre Protección Internacional de los Adultos la utilización de los siguientes formularios para la aplicación del Convenio.

CERTIFICADO

Artículo 38 del Convenio sobre Protección Internacional de los Adultos,
firmado en La Haya el 13 de enero de 2000

A. La autoridad infrascrita:

País:
Estado - provincia (en su caso):
Nombre de la autoridad expedidora:
Dirección:
Teléfono.: Fax: Correo electrónico:

certifica que:

por
 se ha tomado una medida de protección
 se ha confirmado la validez de un poder de representación
el

B. Adulto interesado:

Apellido(s): Nombre(s):.....
Fecha y lugar de nacimiento:
País de residencia habitual:
Dirección:
.....
.....

C. Titular del certificado:

Apellido(s): Nombre(s):.....
Fecha y lugar de nacimiento:
País de residencia habitual:
Dirección:
.....
.....
Teléfono.: Fax: Correo electrónico:

D. Poderes del titular del certificado:

1. El titular del certificado actúa en calidad de:
.....
en aplicación de la ley :

2. Los poderes conferidos al titular del certificado:

a) se refieren a la persona del adulto y:

- son ilimitados
- están limitados a las siguientes categorías de actos:

.....
.....

- están limitados a los siguientes actos:

.....
.....

- están sometidos a la autorización de:

b) se refieren al patrimonio del adulto y:

- son ilimitados
- están limitados a las siguientes categorías de actos:

.....
.....

- están limitados a :

- los bienes muebles
- los bienes inmuebles
- los siguientes bienes:

.....
.....
.....

- están sometidos a la autorización de:

.....

Los poderes conferidos al titular del certificado:

- expiran el:
- surtirán efecto salvo modificación o revocación ulterior.

E. Poderes que conserva el adulto:

a) por lo que respecta a su persona:

.....
.....

b) por lo que respecta a sus bienes:

.....
.....
.....

Se acompañan al presente certificado:

- una copia de la correspondiente decisión o poder de representación:
- una lista completa de los poderes del titular del certificado y de los poderes que conserva el adulto:

en

francés

inglés

La calidad y los poderes consignados en el presente certificado se presumirán conferidos en la fecha de éste a esa persona salvo prueba en contrario.

Para más información, sírvase ponerse en contacto con la autoridad expedidora.

Hecho el en

Firma

Sello

MEDIDAS DE PROTECCIÓN RELATIVAS A UN ADULTO

Convenio sobre Protección Internacional de los Adultos,
firmado en La Haya el 13 de enero de 2000

1. Apartado 1 del artículo 8 del Convenio:

La autoridad infrascrita:

.....
.....

tiene el honor de comunicar a la autoridad siguiente:

.....
.....

- que por propia iniciativa
- que a petición de la siguiente autoridad:

.....
.....

solicita que se tomen medidas de protección:

- respecto de la persona del adulto:

Apellido(s): Nombre(s):.....

Fecha y lugar de nacimiento:

Dirección:

.....
.....

- en relación con su patrimonio
- en relación con el siguiente bien:

.....

en aplicación de la letra a. b. c. d. e. f.

del apartado 2 del artículo 8 del Convenio.

Hecho en el

Firma

Sello

2. Apartado 3 del artículo 8 del Convenio:

La autoridad infrascrita:

.....
.....

tiene el honor de dar la siguiente respuesta a la anterior solicitud :

- acepta su competencia
- no acepta su competencia

Hecho en el

Firma

Sello

INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN RELATIVAS A UN ADULTO

Convenio sobre Protección Internacional de los Adultos
firmado en La Haya el 13 de enero de 2000

La autoridad infrascrita:

.....
.....

tiene el honor de comunicar que la autoridad siguiente:

.....
.....

1. en aplicación del artículo 7 del Convenio

- estudia la adopción de medidas de protección
 - en relación con la persona del adulto (art. 7-1)
 - en relación con el patrimonio del adulto (art. 7-1)
- ha adoptado medidas de protección (art. 7-2, 7-3)
- ha decidido que no es preciso tomar medidas (art. 7-2, 7-3)
- tiene pendiente un procedimiento relativo a la protección del adulto (art. 7-2);

2. en aplicación del artículo 10 del Convenio

- ha tomado medidas de urgencia (art. 10-1)
- ha tomado medidas de protección (art. 10-2);

3. en aplicación del artículo 11 del Convenio

- estudia la adopción de medidas de protección de la persona del adulto (art. 11-1)
- ha tomado una decisión respecto de las medidas de protección exigidas por la situación (art. 11-2);

por lo que respecta al siguiente adulto:

Apellido(s): Nombre(s):.....
Fecha y lugar de nacimiento:
Dirección:
.....
.....

Se acompaña copia de las decisiones correspondientes:

sí no

Para cualquier información complementaria, sírvanse ponerse en contacto con:

- la autoridad infrascrita
- la autoridad que ha tomado la decisión

Hecho en el

Firma

Sello